

EXCMO SR. MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PEDRO SANTISTEVE ROCHE, ALCALDE DE ZARAGOZA, actuando en la representación que legalmente ostenta del Ayuntamiento y de la ciudad de Zaragoza, ante VE comparece y como mejor proceda expone:

Que con fecha 12 de marzo pasado fueron recibidas en el Ayuntamiento de Zaragoza las resoluciones de la Dirección General de Patrimonio del Estado, del anterior día 7 de marzo en las que se dan por terminadas las diligencias previas incoadas y se se manifiesta no tener indicios de que la catedral de San Salvador (La Seo), la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, la iglesia de Santiago el Mayor pertenezcan a persona distinta del Arzobispado de Zaragoza, en tanto que la iglesia de San Juan de los Panetes pertenece a la Administración del Estado. Tales resoluciones fueron, no obstante, reflejadas previamente en la prensa y los medios de comunicación locales del día 10 de marzo de 2018.

Entendemos que tales resoluciones, dicho sea con el debido respeto, puede carecer de acomodo al ordenamiento jurídico y generar indefensión, no tanto, ahora, por la cuestión de la determinación de la titularidad de los bienes cuestionados, que en este momento no vamos a debatir (aunque hemos de hacer notar que la finca de San Juan de los Panetes obra en el Registro de la Propiedad nº 2 de Zaragoza a nombré del Arzobispado de Zaragoza y que en 2016 fue rechazado el intento de la Admisnitción del Estado de modificarla), como por el hecho de haber realizado la investigación y haber llegado a terminarla sin la participación de las personas que podrían haber aportado datos de interés para la tramitación. De ahí que entendamos que deba formularse frente dicha resolución, RECURSO DE ALZADA, el cual venimos a fundamentar en las siguientes consideraciones:

El art. 105 c) de la Constitución garantiza la audiencia del interesado en la elaboración de los actos administrativos que les afecten. Por su parte, el art. 82 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo ordena que en el expediente, y antes de la propuesta de resolución, se dé audiencia a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, aquéllos puedan aportar los documentos y las justificaciones que entendieren pertinentes.

La importancia del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo ha sido relativizada en algunas ocasiones y destacada y ensalzada en otras, como así lo ha entendido el Tribunal Supremo al considerar que este trámite *"no es de mera solemnidad, ni rito formalista y sí medida práctica al servicio de un concreto objetivo, como es el de posibilitar a los afectados en el expediente el ejercicio de cuantos medios puedan disponer en defensa de su derecho"* y así consta en diversidad de sentencias, entre las cuales se pueden citar las de 30 de abril de 1985, 9 de diciembre de 1986, 22 de septiembre de 1991, 12 de mayo de 1998, 13 de octubre de 2000, recurso 5697/1995 (LA LEY 4206/2001), 7 de octubre de 2008 recurso 6828/2005 (LA LEY 148095/2008) y 30 de septiembre de 2010 recurso 5276/2005 (LA LEY 181880/2010).

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha afirmado que *"cuando la decisión que afecta al ámbito de derechos e intereses de los ciudadanos procede de un órgano de la Administración que está legalmente obligado (art. 105 c de la Constitución) a darle audiencia previa, sin que tal audiencia se haya producido, la infracción de esta obligación legal puede y debe ser corregida por los órganos del Poder Judicial"* (Auto 232/1983 de 25 de mayo).

El Ayuntamiento que represento entiende que la funcionalidad del trámite de audiencia no se limita a asegurar la mera posibilidad de formular alegaciones, sino que va más allá, en la medida en que pretende facilitar al interesado el conocimiento de la totalidad del expediente y permitirle, realizar una defensa eficaz y completa de sus intereses en base a lo actuado en el procedimiento, en nuestro caso, con aportación de datos, criterios y pericias que pudieran haber llevado a la terminación del procedimiento con un signo distinto.

Es de destacar también que la perspectiva de la relevancia de la audiencia en los procedimientos administrativos es tal que ha obtenido una considerable potenciación e intensificación en la Ley 39/2015, por una parte, reconociéndola como un derecho subjetivo del ciudadano (art. 13.i) y configurando el derecho a ser informado de la posibilidad de ejercitarla (art. 64.f) y, por otra parte, impulsándola en otros procedimientos, entre ellos y de manera característica en el de elaboración de disposiciones.

Adicionalmente, hemos de recordar que, en nuestro caso, el respeto al trámite de audiencia vendría avalado por el contenido de la legislación patrimonial (art. 56.a Ley 33/2003) y por la reguladora de las relaciones entre instituciones públicas y que predica el respeto a la buena fe y a los principios de coordinación, cooperación y lealtad institucional (art. 103 CE, art. 3 Ley 40/2015).

Por tal motivo

SOLICITO A VE que admita escrito, teniendo por formulado el recurso que se indica y, en su virtud, lo estime, declarando la anulación de las resoluciones que se impugnan y la retrotracción del trámite de los expedientes a la fase de otorgamiento de audiencia al Ayuntamiento de Zaragoza y quienes éste pudiera designar para la aportación de documentos y datos.

Zaragoza, a 21 de marzo de 2018.

EL ALCALDE



Fdo: Pedro Santistevé Roche

EXCMO SR. MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS